

II. Situación Actual

II.1 Contexto Físico

Antes del paso del Huracán Mitch por el territorio hondureño, se estimaba que un 90% de los agricultores no tenía acceso al crédito, a la asistencia técnica, a los paquetes tecnológicos, ni a los recursos de capital, tales como maquinaria, instalaciones, animales de trabajo, etc., y enfrentaban múltiples problemas que les limitaba grandemente un verdadero desarrollo rural. Como agravante, la situación del recurso forestal hondureño presentaba un alto grado de degradación, con consecuencias en el medio ambiente, el deterioro ecológico y la sobreexplotación de terrenos frágiles.

A raíz de la ocurrencia del huracán, esta situación, ya caótica, empeoró tremendamente. Honduras sufrió cuantiosas pérdidas en sus carreteras, puentes, vías de acceso secundarias, viviendas, medios de producción, recurso forestal y, desgraciadamente también, un gran número de compatriotas. Estos datos se han cuantificado en varios documentos preparados por técnicos nacionales y extranjeros, y reflejan la difícil tarea de reconstrucción que se requiere impulsar para sacar el país de su retraso.

Los muchos estudios (PLANFOR, 1996; PNUD, 1999 y Flores y Zelaya 1999), entrevistas con autoridades departamentales y municipales, pobladores rurales, proyectos agroforestales que actúan en el país y observaciones personales, indican que los principales efectos del Mitch se manifestaron en la forma de inundaciones masivas, deslizamiento de tierra y degradación de muchos ecosistemas; sin menospreciar, por supuesto, la pérdida de vida de miles de hondureños. Como consecuencia se concluye que el sector productivo agropecuario se halla gravemente afectado en un alto porcentaje.

Por ser Honduras un país de vocación forestal (fisiografía abrupta) y de cuencas hidrográficas, sus mayores efectos se dieron por erosiones y deslizamientos en masa de los suelos, ya de por sí desprotegidos. Este fue el origen de enormes volúmenes de sedimentos que colmaron los lechos de las corrientes, disminuyendo así su capacidad hidráulica y volviéndose más propicios a sufrir frecuentemente inundaciones que causan pérdidas económicas en muchos lugares rurales y urbanos de la nación.

Estos procesos erosivos, a su vez, vinieron a disminuir la cobertura vegetal ya mermada y a convertir los suelos forestales en sitios de muy baja productividad y capacidad para que se desarrollen nuevos bosques. De la misma forma, el Huracán afectó profundamente a numerosas tierras cultivables, al erosionar por completo su capa arable y dejar en su lugar piedras y desechos de la destrucción de los bosques. La pobreza es grave en el sector rural, donde el nivel de indigencia alcanzó un 66% de la población en el año 1999. Además de las condiciones expresadas anteriormente, a través de entrevistas con habitantes de las zonas rurales se pudieron detectar los siguientes problemas específicos:

- Falta de organización de la gente de campo.
- Carencia de financiamiento para la producción.

- Falta de asistencia técnica.
- Problema de tenencia de la tierra.
- Producción basada en pocos cultivos.
- No se puede garantizar la seguridad alimenticia y, en muchas áreas, hay indigencia.
- Educación no adecuada a la zona rural.
- Decisiones de gobierno más políticas que técnicas.
- Mal uso y acceso de los recursos naturales.
- Ley forestal insuficiente.
- Carencia de planes adecuados sobre manejo del bosque.
- Poca participación del Estado y otros organismos en sus proyectos de desarrollo.
- Falta de vías de acceso a las comunidades y fincas.
- Deterioro de las cuencas hidrográficas y contaminación de las fuentes de agua.
- Falta de aplicación de las leyes en relación con las áreas protegidas.
- Falta de conciencia y cultura acerca de la conservación del ambiente.
- Falta delimitación de áreas agrícolas y ganaderas.

Realidad Ecológica

Somos un país con una alta biodiversidad y riqueza ecológica, pero con una alta incidencia de desastres naturales: huracanes, deslizamientos, tormentas tropicales, sequías. Estos fenómenos tienen sus causas naturales y sociales. Entre los aspectos antropogénicos se encuentran los monocultivos del banano, caña de azúcar, tala incontrolada del bosque, industria minera, abuso de plaguicidas, erosión de los suelos, proliferación de autos viejos procedentes de otros países que aumentan las emisiones tóxicas de monóxido de carbono y óxido nítrico, quema incontrolada de la biomasa y del bosque, todo lo cual incrementa la contaminación atmosférica.

Como resultado de la deforestación, contaminación de suelos, aguas y destrucción ecológica, etc., se produce una alta frecuencia de enfermedades relacionadas con problemas ecológicos. Entre estos males se encuentran patologías de las vías respiratorias y digestivas, infecciones, parasitismo, alergias, cáncer y desnutrición.

En materia ecológica, Honduras no tiene una política claramente definida que proteja nuestros bosques, riquezas y reservas naturales. La extinción de las especies y el acelerado proceso de destrucción de la biodiversidad constituyen una gran pérdida para el país y la humanidad. No existe una visión sobre la importancia genética y económica de nuestros recursos naturales. Infortunadamente, se protegen más los intereses de las empresas multinacionales que los del país.

Después del Huracán Mitch (octubre y noviembre de 1998), la recuperación del país ha sido lenta y tomará casi medio siglo para rehabilitarnos. Sin embargo las lecciones de la tragedia no se han aprendido. Se continúa con la deforestación, quema de bosques, biomasa y abuso de plaguicidas en forma incontrolada. Debido a la falta de una política ambiental y ordenamiento territorial, se autorizan proyectos perjudiciales a nuestros ecosistemas y a las poblaciones humanas.

El caso más trágico lo representa el proyecto Minero San Martín en San Ignacio, Valle de Siria, donde se emplearán seis mil toneladas anuales de cianuro por un lapso de una década (o sea, 60 mil toneladas).

En asuntos ambientales, pese a los recursos humanos calificados y equipo con que cuenta la ÚNAH, la institución no es consultada por el Estado tanto en el análisis de políticas como en estudios de evaluación relativos a impacto ambiental.

II.2 Población y Vivienda

Población

Por su naturaleza, la actual dinámica demográfica hondureña necesita de un planteamiento orientado a la atención y previsión de los problemas poblacionales.

Las actividades de reunión y análisis de datos demográficos han continuado en el país, aunque en los últimos años la falta de recursos financieros ha generado algunos inconvenientes en la continuidad de la recopilación. Una actividad de mucha trascendencia a realizarse próximamente, es la ejecución del Censo de Población y Vivienda del año 2001 que permitirá generar la información que se requiere para planificar acciones de desarrollo económico y social en el futuro.

El fenómeno del alto crecimiento demográfico, que no es único en la región, constituye el resultado del elevado nivel de fecundidad, cuando la mortalidad ha descendido y la migración no ha tenido repercusiones de importancia. El acelerado crecimiento de la población continúa siendo el principal problema demográfico del país, el que aún cuando acusa un descenso, éste es muy incipiente y produce la entrada de constantes contingentes en la población, los que inciden tanto en la demanda y oferta de bienes y servicios, como en el nivel de satisfacción de las necesidades básicas y en el medio ambiente.

La composición por edad de la población muestra una estructura joven; esto hace que la cantidad de personas dependientes sea alta y sus demandas recaigan en la población en edad de trabajar, en especial en la económicamente activa. El cambio de estructura poblacional joven a una estructura menos joven, llevará mucho tiempo dado que la reducción en la fecundidad es muy lenta.

Los niveles de fecundidad de las mujeres son aún altos; pese a que el deseo de proles con un número de hijos menor es evidente, principalmente en el área rural. Unida a la regulación de la fecundidad, el uso de métodos anticonceptivos es clave para determinar el tamaño de las proles. En la medición de la fecundidad, la desagregación geográfica y social muestra grandes desigualdades, con tasas mayores en la zona rural así como en las mujeres pobres y en las de menor nivel educativo.

El avance de la ciencia ha logrado incidir en el ataque de las principales enfermedades que han azotado a la humanidad, aunque en los países en desarrollo como el nuestro todavía están presentes enfermedades erradicadas en las sociedades modernas.

En Honduras se han logrado descensos significativos en los indicadores de la mortalidad infantil, pero aún así los niveles siguen siendo altos comparados con los países de la región. En la mortalidad materna los descensos han sido más lentos, debiéndose realizar los esfuerzos necesarios para tratar de reducir los niveles de esta variable. Con la tragedia generada por el Mitch, los índices de la mortalidad general se vieron alterados, ocasionando un fuerte impacto en la mortalidad anual prevista en el país en 1998.

La migración es otra de las variables demográficas, y mide los diferentes movimientos de la población que rebasa una frontera geográfica específica buscando mejores opciones sociales y económicas. Los niveles de la migración interna se han incrementado en los últimos años, y los flujos interdepartamentales forman dos subsistemas: uno para Cortés y otro para Francisco Morazán.

La migración internacional mide los desplazamientos hacia dentro y fuera de las fronteras patrias. En cuanto a la inmigración, el país no ha sido muy atractivo; esto se demuestra porque el porcentaje de extranjeros nunca ha superado el cinco por ciento de la población total. En los últimos años, aún con las libertades migratorias de movilización entre los países limítrofes con Honduras, esto no se ha traducido en desplazamientos masivos para residencias permanentes en el país, lo que deja claro que la mayoría de los desplazamientos son de origen comercial y en tránsito hacia países con un mejor desarrollo que los de la región, lo cual convierte al país en un corredor de inmigrantes hacia el norte.

En cambio la emigración que había venido teniendo un crecimiento acelerado, en los últimos años ha aumentado aún más con motivo del desastre natural de 1998, principalmente la emigración ilegal que incluso ha dejado una secuela de muertes en el difícil camino hacia los Estados Unidos. Por tal motivo el gobierno de ese país ha dado a los inmigrantes hondureños la oportunidad de obtener permanencia temporal por unos meses (Programa de Protección Temporal) que, de hecho, se puede convertir en una ventana de legalización migratoria concedida por primera vez a nuestros compatriotas.

Por otra parte, los patrones de distribución espacial heredados desde el período precolombino y la colonización española continúan vigentes, mostrando una concentración en la parte centro sur occidental del país. El sector oriental siempre ha sido despoblada con una tendencia creciente de colonización depredadora de los recursos naturales. La mayor concentración poblacional se sitúa en el corredor central que cruza todo el país de norte a sur e incluye los departamentos donde se ubican las ciudades importantes. Al mismo tiempo, forma una concentración bipolar que giran en torno a la ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

En cuanto a la población económicamente activa (PEA), en las últimas décadas se ha observado que, aunque aún es esencialmente rural y masculina, presenta una tendencia hacia la urbanización y mayor presencia femenina. El principal problema de empleo radica en el gran porcentaje de trabajadores subempleados, ya que éstos son mayoritarios con respecto a los que están totalmente desempleados. Por otra parte, hay un buen número de trabajadores no remunerados, lo que constituye un aporte al incremento de trabajadores con problemas de empleo dentro de la PEA. Otro problema es el bajo nivel de escolaridad que se observa en la población económicamente activa.

En cuanto al número de hogares en el país, la tendencia ha sido al aumento en los últimos años, incluso con una tasa de crecimiento superior a la de la población en general. El número promedio de personas por hogar muestra un declive incipiente, producto de la relativa reducción de las tasas de fecundidad. Los hogares en su mayoría son los familiares, donde están presentes relaciones de parentesco entre sus miembros. Los hogares en su mayoría son los nucleares y viven en éstos más de la mitad de la población del país. El alto porcentaje de hogares extendidos es un hecho que merece atención.

La conformación típica de los hogares hondureños gira en torno a núcleos familiares, integrados por una pareja, hijos y otros agregados como parientes y no parientes. Otra derivación importante de la composición de los hogares es aquella integrada por solamente un miembro de la pareja (jefe) e hijos, o la misma conformación más otros agregados como parientes o no parientes; todos éstos representan un cuarto del total de hogares.

Uno de cada cuatro hogares hondureños son incompletos (sólo con la existencia de un miembro de la pareja) y, además, cuatro de cada cinco incompletos tienen jefatura femenina, hecho que resulta significativo por la vulnerabilidad a que están expuestos al faltar un miembro de la pareja. Asimismo, los hogares incompletos predominan más en áreas urbanas que en las rurales.

Las etapas del ciclo vital familiar que tienen más importancia para los hogares hondureños, son aquellas donde el núcleo está en expansión, es decir, en proceso de crecer numéricamente. Tres de cada cuatro hogares hondureños nucleares y que son completos, tienen formación reciente o están en expansión.

En resumen, el país presenta una dinámica demográfica caracterizada por un crecimiento acelerado de la población, con una estructura demográfica joven y con descensos lentos en la mortalidad y la fecundidad, las tasas de migración neta continúan siendo negativas, lo cual lleva a tasas de crecimiento demográfico que se reducen lentamente y que producen un efecto multiplicador. En la actualidad la población hondureña supera los seis millones de personas.

Vivienda

Uno de los indicadores de desarrollo del país es la situación de la vivienda, la cual constituye un elemento básico de desarrollo personal, familiar y comunitario.

En Honduras encontramos un déficit acumulado, de acuerdo a estimaciones realizadas por organismos internacionales, que alcanza cuantitativa y cualitativamente a más de 700,000 viviendas. El 40 % corresponde a las áreas urbanas y el 60 % a las zonas rurales. Del total de viviendas existentes, cerca del 60% tienen deficiencias estructurales y de servicios, el 75% de las viviendas rurales y el 48 % de las urbanas presentan problemas de hacinamiento y promiscuidad.

Por otra parte, el acceso está severamente limitado por el nivel de ingreso de la población, el que de acuerdo a la cantidad que se puede destinar para este uso (un máximo de 25% del ingreso familiar), únicamente el 10% de la misma tiene la capacidad de financiamiento y mantenimiento y por la reducida oferta y sistemas de financiamiento y producción apropiados a las condiciones socioeconómicas.

La respuesta institucional sectorial se reorganiza radicalmente en el contexto del Plan de Reestructuración de la Economía, a partir de 1991, cambiando su rol de proveedor a facilitador (programas, políticas, coordinación, normas, financiamiento, facilitación administrativa), incrementando significativamente el papel de la sociedad civil en la gestión, diseño y construcción por medio de municipalidades, ONGs, grupos asociativos y organizaciones comunitarias.

Esta situación se agudiza a partir de noviembre de 1998, por los daños ocasionados por el huracán y tormenta tropical Mitch, a cerca de 80,000 viviendas de las cuales se perdieron el 60 % y el resto resultó severamente dañado. El valor de las pérdidas, incluyendo los mobiliarios, enseres, refugios temporales, remoción de escombros, servicios básicos y alquileres, asciende a US\$ 344.1 millones.

La pérdida de viviendas es solo una parte del problema debido a que los daños se extendieron a los barrios, colonias de las ciudades, pueblos y aldeas de gran parte del territorio nacional, afectando la calidad de vida y agudizando la situación de pobreza de la mayoría de la población.

La respuesta nacional e internacional es un proceso que está teniendo un impacto significativo en el sector. La cantidad de recursos orientados a Honduras (US\$ 800 millones) para reconstrucción sobrepasa lo invertido en décadas. La cantidad de viviendas planificadas y en construcción superará las 60 mil unidades, y la cantidad de población movilizada y participando activamente en el proceso alcanzará más de 400 mil personas en los próximos 5 años.

La importante movilización de recursos, nunca antes vista, plantea el reto de la sistematización, internalización y sostenibilidad de la experiencia que se está desarrollando, en todos sus aspectos (social, técnico, organizativo, legal y financiero, entre otros). Además, plantea la

necesidad de incorporar, reorientar o aumentar parte del quehacer de los diferentes actores sociales en los procesos de desarrollo de los asentamientos humanos (vivienda, infraestructura y servicios) del país.

II.3 Contexto Socio-Político

Desde el punto de vista político, es alentador el protagonismo que van adquiriendo varios sectores de la sociedad civil, al mismo tiempo vemos como se produce el choque o desajuste entre viejos y nuevos actores dentro de la escena pública.

Siguen vigentes, empero, el exclusivismo político y el clientelismo. Los dirigentes políticos no suelen hacer planteamientos serios y objetivos acerca de temas de interés local, nacional o internacional, tendiendo más bien a zaherir o burlarse de los contrincantes, adquiriendo las rencillas personales mayor dimensión que la agobiante problemática real. Al deterioro de la imagen del político, se corresponde al desinterés de gran parte de la ciudadanía por los asuntos públicos.

La fragmentación social en gremios ha originado distorsiones, en las que hay un sobrepeso de derechos en detrimento de deberes, lo que ha impedido que el Estado establezca políticas salariales balanceadas. Los estatutos gremiales han creado distorsiones y mayor desigualdad social.

El movimiento popular ha sido debilitado por los diversos gobiernos que se han sucedido en el poder mediante la cooptación, dádivas, divisionismo, etc., con lo que aquel ha reducido su papel beligerante dentro de la sociedad. No se ha construido aún un verdadero poder ciudadano, ni se cumple con el artículo 5 constitucional que postula los gobiernos de integración nacional.

Todavía no se cuenta con una propuesta de país y de transformación que haya sido discutida y aceptada por la comunidad nacional. Los esfuerzos no pasan de la etapa reconstructiva, después del huracán Mitch. Aunque se ha logrado cierto consenso antes y después de la comparencia en Estocolmo, lo que ha permitido ofrecer cierta idea de unidad de propósitos comunes y compartidos. Por lo general, los distintos grupos sociales han dado un compás de espera al gobierno en el planteamiento de sus demandas específicas y el nivel de confrontación ha sido razonable; evitando las polarizaciones, el gobierno ha sabido canalizar algunos de estos reclamos, como ocurrió a principio de agosto con el sector cafetalero.

La reunión del grupo consultivo en febrero de este año, encabezada por el BID, dio su respaldo al accionar estatal en materia de reconstrucción. Pero continúa el centralismo de carácter personalista como estilo de gobierno y se canalizan dineros públicos con fines publicitarios más allá del simple anuncio y promoción de las obras realizadas. No existe suficiente coordinación, ejecución y toma de decisiones en forma descentralizada, debido a la limitada delegación de responsabilidades por parte del poder ejecutivo.

La inseguridad ciudadana, como resultado del incremento de la violencia, pone en grave riesgo las condiciones de vida de toda la ciudadanía y es un obstáculo al desarrollo de la sociedad y

sus instituciones; así lo percibe la población. Frente a esa gravísima situación, el Estado ha sido incapaz hasta ahora de elaborar estrategias y acciones orientadas al combate eficaz de la violencia.

En el plano internacional figuramos como un país aislado, quedando excluido de decisiones conjuntas tomadas por Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En sus relaciones con Nicaragua, el gobierno ha demostrado una actitud prudente y madura al no caer en la trampa de las represalias comerciales o en provocaciones armadas. Al mismo tiempo que ha hecho valer nuestro reclamos soberanos, buscando alcanzar una solución jurídica por medio de la Corte Internacional de Justicia. La participación del presidente Carlos Flores en la Cumbre Iberoamericana de La Habana fue positiva al igual que en otros cónclaves internacionales.

Por otra parte, se ha debilitado el principio de soberanía nacional por la intromisión de los organismos de crédito internacionales en la toma de decisiones. Se acepta y emplea el lenguaje de dichos organismos en materia social y se admite de hecho sus visiones y enfoques.

De igual manera, la administración pública se ve afectada por la injerencia de algunos dirigentes políticos especialmente en áreas como Educación y Salud, con el propósito de fortalecer el clientelismo. No se podrá lograr eficiencia administrativa ni mejorar la educación, mientras se siga practicando el mecanismo de las "recomendaciones" para otorgamiento de empleos, lo cual forma parte de las promesas que hacen los candidatos a cargo de elección popular, que se promocionan con anticipación al período legal de propaganda.

Se sigue negando el 5% del presupuesto nacional a las municipalidades, el 3% al Poder Judicial y el 6% a la UNAH, lo que impide la adecuada ejecución de programas. Según el último Informe sobre Desarrollo Humano, ocupamos el lugar 113 entre 174 naciones.

Mientras en América Latina el promedio del gasto social estatal per cápita es de unos \$500 anuales, en Honduras lo es de \$70 aproximadamente. Según el último informe de Desarrollo Humano, correspondiente a 1999, el 40% de los hondureños sobrevive con un dólar diario.

En el país existen desequilibrios sociales regionales, nacionales y a nivel departamental, áreas deprimidas en las que la acción del Estado es muy baja en salud, educación, menor nivel de escolaridad, equidad de género y presencia policial. De acuerdo con la CEPAL, en el centro de los problemas del desarrollo se encuentra la cuestión de la pobreza, especialmente rural. Según el documento Estrategia de Reducción de la Pobreza, Diagnóstico Preliminar, del Gobierno de la República, de mayo del 2000, se indica que el 66% de los hogares del país se encontraba, en 1999, bajo la línea de pobreza (aproximadamente 747,000 hogares). La pobreza en Honduras es mayoritariamente rural, pues se eleva a casi 75% de los hogares en 1999, mientras en el sector urbano, el 57% de los hogares están bajo la línea de pobreza.

La deuda del gobierno con las municipalidades asciende a dos mil millones de lempiras por concepto de transferencias, de conformidad con la asignación del 5% legalmente reconocida. Los gobiernos locales urgen también de mayor asistencia técnica y planificación estratégica.

Es poco probable que el combate a la pobreza pueda enfrentarse a partir de la visión de los organismos internacionales de crédito, ya que sus recomendaciones obedecen más a intereses relacionados con el pago de la deuda externa. Sin la urgente reactivación del aparato productivo, la acción asistencial del Estado no será suficiente para superar la actual situación económica recesiva. Por otro lado, es previsible la reducción en los montos brindados por los organismos internacionales para fines asistenciales. Un país que depende casi absolutamente de la asistencia financiera internacional, no podrá alcanzar niveles que le permitan superar los dramáticos índices actuales de pobreza que padece.

Con relación a los miles de compatriotas que viven en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, si bien es cierto que las remesas que envían a sus familiares generan una importante fuente de ingresos al país, también lo es que el inmigrante se ve sometido a una dependencia mental, además de profundizar su disolución familiar y agravar el número creciente de vidas que anualmente se pierde en el intento de llegar a aquel país. El hecho de que la administración Clinton haya prorrogado por otros doce meses la permanencia de nuestros compatriotas en situación migratoria irregular debe ser visto como un hecho positivo, a corto plazo; pero no se puede ni se deben fundamentar las estrategias nacionales de desarrollo en una eventual amnistía migratoria. En tanto no se generen nuevas y más fuentes de empleo, continuará infortunadamente el peligroso flujo migratorio, especialmente de personas jóvenes de escasos recursos económicos.

II.4 Contexto Económico

Desde 1982, se vienen aplicando, en forma ininterrumpida, políticas de estabilización y de ajuste estructural. Las primeras centraron su atención en los problemas macroeconómicos de inflación, desequilibrios del presupuesto del gobierno y de balanza de pago; planteándose, al mismo tiempo, la necesidad de reducir y reformar el Estado y, fundamentalmente, el cierre de las instituciones creadas durante el período reformista de los años setenta.

Al finalizar los años ochenta, la deuda multilateral y bilateral del país había caído en mora con un saldo aproximado de 250 millones de dólares, situación que más adelante se convertirá en una camisa de fuerza en las exigencias de los organismos internacionales para la aplicación de los programas de ajuste estructural ortodoxos; era necesario, entonces, corregir los desequilibrios macroeconómicos y recuperar la elegibilidad perdida.

Se emite la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto 18-90), junto a políticas de reformas institucionales en la estructura del Estado: privatización, liberalización y desregulación económica. Con estas medidas, el gobierno demuestra su firme intención de marchar por el camino del ajuste, concretándose, a partir de entonces, algunos acuerdos: el convenio de ajuste estructural No. 522-0365 con la AID (en 1992) por un valor de \$25 millones en carácter de donación; primer convenio ESAF, aprobado por el FMI el 24 de julio de 1992. Por su parte el gobierno crea el FHIS y el PRAF, como instrumentos de compensación social, dedicando buena parte de su actividad a atender la generación del empleo

en los sectores más pobres de la población. A partir de ese momento, se adopta en firme el paradigma de ajuste, cuyo horizonte será el crecimiento hacia afuera.

En el segundo cuatrienio (1994-1998), la política económica continuó en la línea emprendida en el período precedente y, aunque el gobierno no firmó un acuerdo explícito con el FMI, se comprometió con un Programa de Monitoreo en el cual se contemplaba, entre otros, una meta de crecimiento entre 4 y 4.5%, y 16% de inflación y una acumulación de reservas internacionales para tres meses de importaciones. En este período se adicionó, a las políticas de ajuste, el postulado del rostro humano, un nuevo discurso de los organismos internacionales para intervenir con la política económica en favor de los sectores sociales y encarar la pobreza y extrema pobreza.

En abril de 1998, el gobierno anunció la aplicación de un nuevo paquete de medidas de carácter fiscal, conocido con el nombre de Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano, cuyo trasfondo estriba en transformar la estructura tributaria nacional, restándole importancia en la recaudación de ingresos a los impuestos directos; pasando el peso a los indirectos y, dentro de éstos, enfatizando en los impuestos de orden interno, por cuanto también se reducen los del comercio exterior (de exportación e importación).

Hoy, como ayer, se sigue manejando como problema fundamental el déficit fiscal, cuantificado en L. 1,800 millones, para 1997. monto que legitimaría las nuevas medidas fiscales, reconocimiento que se extiende a los problemas de carácter social y las dificultades de la economía ante un crecimiento muy bajo.

En marzo de 1999, el gobierno hondureño firmó con el FMI un nuevo acuerdo de ESAF, con vigencia para 1999-2001, con el cual se pretende lograr un clima de estabilidad macroeconómica, apoyo a la balanza de pagos por un monto de \$200 millones; contemplando los siguientes criterios de ejecución: financiamiento interno neto al sector público no financiero, contratación de deuda no concesional, reservas internacionales netas y eliminación de atrasos en el pago del servicio de la deuda externa; planteándose, nuevamente, la privatización de empresas como HONDUTEL, así como los servicios de comercialización del SANAA y distribución de la ENEE; y que los esfuerzos de la reconstrucción nacional recayeran en el marco de la empresa privada.

En este marco de liberalización y privatización, se crearon condiciones para estimular la educación superior de carácter privado, la cual tampoco ha respondido a la demanda que plantea la dinámica del aparato productivo

Instrumentos de la política económica y la política monetaria

Con las reformas a la Ley del BCH, realizadas en diciembre de 1996 por el Congreso Nacional, éste le cambia su papel, en la economía, de regulador del sistema financiero función que tradicionalmente se le había asignado, al de administrador de la oferta monetaria, es decir, de controlar la cantidad de dinero en circulación en el mercado para evitar la inflación y los